

sociedad

Este paraje de Colmenar Viejo (Madrid) está incluido en un proyecto ministerial para construir un depósito subterráneo de CO₂. ILLUSTRACIÓN DE J. SERRANO

“¿Un depósito de qué?”

El proyecto de Industria de instalar almacenes subterráneos de CO₂ residual pilla desprevenidos a alcaldes y vecinos de los municipios seleccionados

ABEL GRAU
Madrid

“¿Un almacén de qué?”, se pregunta sorprendido Julián, jubilado de 66 años, en la plaza de España de Tomelloso (Ciudad Real), uno de los 11 municipios en los que el Estado ha reservado terrenos para construir depósitos subterráneos del CO₂ emitido por centrales térmicas.

Julián no era el único que ignoraba la noticia el pasado sábado, cuando la publicó EL PAÍS. En ninguna de las localidades consultadas por este periódico ni los alcaldes ni los vecinos conocían el proyecto del Ministerio de Industria, que prevé almacenar los residuos de dióxido de carbono a más de 1.000 metros de profundidad. Las reacciones oscilan entre la cautela de algunos alcaldes, la preocupación de los vecinos y el rechazo de los ecologistas, que sencillamente consideran la iniciativa como “una manera de esconder la basura bajo la alfombra”.

El proyecto está en una fase muy inicial. Industria sólo ha reservado los 11 emplazamientos para evitar su comercialización (la disposición se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de febrero). El siguiente paso será estudiar en profundidad cada una de las reservas, según ha señalado Juan Manuel Kindelán, presidente de la Fundación para Estudios sobre la Energía, el organismo que ha seleccionado los terrenos. Son cinco en el mar: cuatro frente a la costa cantábrica, en Llanes y Buelna (Asturias), Suances (Cantabria) y Mundaka (Vizcaya), y uno en la bahía de Huelva; y seis en tierra firme: Colmenar Viejo (Ma-

drid), Guardo (Palencia), Ejulve (Zaragoza), Caspe (Teruel), Tomelloso (Ciudad Real) y La Murada (Alicante). Se trata de un plan previsto para 2015 que aún carece de peticiones de permisos y que requiere un amplio estudio de impacto ambiental.

Es precisamente esta falta de concreción, junto al hecho de enterarse a través de la prensa, lo que ha indignado a algunos alcaldes. Tanto el de Chunta de Ejulve (222 habitantes), José Manuel Salvador, como la de Caspe (8.495 habitantes), Teresa Francín, se quejan de que nadie les ha informado e inciden en que no es ése el desarrollo que quieren para sus pueblos. “De entrada no me parece bien, y hay que estudiarlo a fondo, aunque creo que es a muy largo plazo. Veremos”, sostiene Salvador.

El resto de ayuntamientos consultados por este periódico tampoco conocían el plan de Industria. Los de Llanes (13.271 habitantes) y Tomelloso (35.534) estaban sorprendidos, pero esperan a conocer los detalles del proyecto para pronunciarse. El de Orihuela, del que depende el núcleo poblacional de La Murada (3.600 habitantes), señala a través del concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez Barberá, que pedirá información “para presentar las alegaciones oportunas”.

El perímetro del depósito número 4 se extiende al norte de Madrid, desde Colmenar Viejo a Algete, e incluye terrenos de Tres Cantos, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. El alcalde de Alcobendas (105.000 habitantes), Ignacio García de Viñuesa, va más allá y asegura que se reunirá “urgentemente”

con sus homólogos de las localidades vecinas, todos del PP, para hacer frente común y pedir explicaciones al Gobierno. El más claro en su rechazo ha sido el de Mundaka (1.789 habitantes), Unai Rementería. “Estoy con una rabia absoluta. No tenía ni la más remota idea. El Ayuntamiento no ha recibido ninguna comunicación. Estas cosas no se hacen así”. Y advierte de que los criterios para ubicar las reservas “no se basen

“Estoy con una rabia absoluta”, dice el alcalde de Mundaka

“No será bueno para el pueblo”, opina un vecino de Tomelloso

Los depósitos en los fondos marinos suscitan la mayor inquietud

solo en los estudios de las petroleras”.

La misma sensación de sorpresa provocó la noticia entre los vecinos de los municipios incluidos en el plan ministerial. “La mierda para acá y el dinero para ellos”, sentenciaba Antonio Martínez, un jubilado de 65 años de La Murada, una localidad que lleva 15 años luchando

contra un vertedero ilegal de basura orgánica.

En Tomelloso, varios jubilados charlaban el sábado en la plaza de España. Pedro, de 64 años, no había leído el periódico pero no le sonaba nada bien eso de que vayan a colocar un almacén de residuos cerca de su pueblo. “Mejor que se lo lleven, porque seguro que no será bueno para el pueblo. El dinero siempre se lo llevan otros”.

Mayor inquietud suscitan las futuras reservas marítimas “No tiene sentido hacerlo en el mar. Si se produjera un escape, ¿quién lo puede controlar a esas profundidades y sometido al oleaje y el viento?” se preguntaba en Llanes Ángel Bataiia, de 49 años, pescador desde hace 30. “A 20 o 22 millas de Llanes el fondo marino alcanza profundidades de 3.000 y 4.000 metros. No hay tecnología para actuar a esa profundidad en caso de que se produjeran emanaciones”, advierte Bataiia.

Parte de la preocupación expresada provenía de la sospecha de que la creación de depósitos puede acarrear la construcción de centrales. Kindelán ya ha sugerido que las centrales térmicas deberían instalarse en las proximidades de estos almacenes para no tener que asumir el coste del transporte de CO₂. “No he oído que haya un proyecto para crear centrales, pero si es así al menos podrían explicarnos de qué va todo eso”, señaló el estanquero José Antonio de la Fuente, de Colmenar Viejo.

Con información de Concha Monseñat, Javier Cuartas, Javier Sánchez del Moral, Salvador Navarro, Alberto Uriona y Manuel J. Albert.

Una tecnología en desarrollo rechazada por los ecologistas

A. G. Madrid

El proyecto de Industria de construir vertederos subterráneos de CO₂ ha chocado con el rechazo unánime de las asociaciones ecologistas. “La captura y enterramiento de dióxido de carbono es una tecnología muy poco desarrollada y muy costosa”, advierte Manuel Sánchez Patón, portavoz de Ecologistas en Acción en Tomelloso. “Además, todavía no sabemos las consecuencias que pueden tener los residuos en el interior de la corteza terrestre”, añade.

La captura y secuestro del dióxido de carbono para evitar que llegue a la atmósfera y contribuya al calentamiento global es una tecnología conocida desde hace años. Sin embargo, aún no se ha probado con eficacia a la escala necesaria para eliminar grandes cantidades de residuos. La Comisión Europea, junto al sector industrial, los centros de investigación y las asociaciones conservacionistas, puso en marcha a finales del año pasado un concurso para elegir 12 proyectos que demostrasen, antes de 2015, la aplicación de estas tecnologías en centrales eléctricas de 400 megavatios, que son las más habituales. Los residuos capturados se inyectarían a continuación en depósitos situados a más de 1.000 metros de profundidad. Así lo hace desde 1996 la plataforma noruega de Statoil en Sleipner, en el Mar del Norte. Separa el dióxido de carbono del gas natural que extrae y lo canaliza hasta un sustrato salino bajo el fondo marino. En Puertollano (Ciudad Real) la planta de Elcogas es pionera desde 1998 en ensayar la captura de CO₂ antes de la combustión del carbon.

Los ecologistas se oponen a esta tecnología porque consideran que es una coartada para que las compañías energéticas sigan produciendo al mismo nivel. De hecho, es el método que defienden las petroleras para luchar contra el calentamiento global “De lo que se trata es de cambiar el modelo energético y, sobre todo, de consumir menos”, señala Sánchez Patón. Una opinión con la que coincide Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, en Llanes, informa Javier Cuartas. “No es la solución porque eso no es más que esconder la basura. Lo que hay que hacer es reducir las emisiones cambiando el modelo energético hacia las energías renovables y consumiendo menos”.

Otra circunstancia de la que alertan los ecologistas es que la colocación de vertederos de CO₂ puede atraer la construcción de plantas térmicas, como señala José Pablo Vázquez, de la asociación ecologista onubense Mesa de la Ría, informa Manuel J. Albert. De este modo, las compañías abaratarían el coste del transporte de residuos desde la central al depósito.